GOBIERNO DE PUERTO RICO

16^{ta.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 398

1 de marzo de 2010

Presentada por el señor *Rivera Schatz*

Referida a la Comisión de Hacienda

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para reasignar a la Sociedad para Asistencia Legal la cantidad de dos millones (\$2,000,000.00) de dólares provenientes del Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito, adscrito al Departamento de Justicia, a los fines de ser utilizados para los gastos operacionales de la agencia durante el presente año fiscal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 183 de 29 de julio de 1998, según enmendada, se creó la Oficina de Compensación a Víctimas de Delito (Oficina). Esta Oficina, adscrita al Departamento de Justicia, fue establecida con el propósito primordial de autorizar y conceder el pago de compensación a las víctimas elegibles para recibir los beneficios que concede la referida Ley. De esta manera la Ley Núm. 183 establece el Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito al cual se le asignó originalmente la cantidad de diez millones (\$10,000,000.00) de dólares, para los gastos de organización y funcionamiento de la Oficina. Históricamente, el Fondo Especial se nutre de entre un millón doscientos mil dólares (\$1,200,000.00) y un millón trescientos mil dólares (\$1,300,000.00) provenientes de la pena especial tipificada en el Artículo 67 del Código Penal de P.R. Al 30 de junio de 2009, el Fondo Especial para Compensación

a Víctimas de Delito contaba con catorce millones setecientos treinta y cinco mil cuatrocientos y un dólar con ochenta y tres centavos (\$14,735,401.83).

Además de los fondos antes mencionados, la Oficina de Compensación a Víctimas de Delito recibe fondos federales en virtud de la ley federal “*Victims of Crime Act*”, conocida como V.O.C.A., por sus siglas en inglés. La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia Federal, asigna estos fondos mediante una fórmula, la cual cada año es variable y se establece de acuerdo a la disponibilidad de los fondos y a la legislación que se presente ante el Congreso de los Estados Unidos de América. De esta manera, se estableció que los fondos federales ascenderán a doscientos sesenta mil dólares (\$260,000) anuales.

No obstante lo anterior, en virtud de la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 32, aprobada el 15 de junio de 2009, se reasignó la cantidad de \$4,931,700.00 del Fondo Especial al Departamento de Justicia para cubrir sus gastos operacionales. Siendo así, dicho Fondo quedó con un balance de diez millones de dólares (\$10,000,000.00). Es de notar que desde la aprobación de la Ley Núm. 183 hasta el presente, el balance del Fondo Especial ha ido aumentando aún luego de cumplir con todas las obligaciones del Programa.

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico y la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América disponen, entre otros, el derecho constitucional a tener asistencia de abogado que alberga un acusado en todo procedimiento penal. Nuestro ordenamiento constitucional, sobre el cual se cimienta nuestro sistema democrático, reconoce la igualdad del ser humano ante la ley y proscribela discriminación por condición social. En atención a estos postulados, el efectivo ejercicio del derecho fundamental a una representación legal adecuada no puede depender de la condición económica de la persona imputada de delito. Ante ello, el Estado viene obligado a proveer la asistencia de abogado cuando la persona imputada de delito no puede obtenerla. Desde su creación en el año 1955, la Sociedad para Asistencia Legal ha asistido al Estado en su deber de garantizar el derecho a

representación legal adecuada, asumiendo una porción sustancial de la litigación criminal gratuita en nuestros Tribunales.

Los abogados de la Sociedad, quienes componen menos del 1% de los abogados activos en Puerto Rico, atienden aproximadamente el 40% de los casos de delitos graves en nuestra jurisdicción. En los pasados cinco (5) años, la Sociedad ha ofrecido sus servicios en 117, 997 casos criminales graves en etapa de vista preliminar y 88, 785 en la etapa de juicio. Cada abogado de la Sociedad es responsable de atender alrededor de 200 casos anualmente. Precisa destacar, además, que estos abogados son responsables del 35 - 40% de las vistas preliminares que se atienden en los tribunales de Puerto Rico. La Sociedad ha asumido la representación legal de los menores indigentes, de las personas que se benefician del programa de Corte de Drogas (Drug Court), además de representar a su clientela a nivel apelativo y en litigación especializada mediante la presentación de recursos especiales y remedios post-sentencia. Además de aliviar el deber estatal de garantizar el derecho a una representación legal adecuada, la Sociedad contribuye con su análisis y pericia en el ámbito penal en los procesos que toman lugar en el Foro Legislativo; labor que nutre y asiste a nuestros legisladores a la hora de evaluar determinada pieza legislativa.

En vista de ello, la Sociedad ha dependido de aportaciones realizadas por el Gobierno de Puerto Rico mediante la Resolución Conjunta de Presupuesto y de otras legislaciones que le allegan cierta cantidad de fondos, como la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982 y la Ley Núm. 244 del 2 de septiembre de 2004. No obstante, desde hace aproximadamente diez (10) años no se ha adoptado legislación a los fines de asignar fuentes de fondos recurrentes adicionales para sufragar los gastos operacionales de la Sociedad.

Añádase que la Sociedad ha ampliado su campo de litigación y, como consecuencia, ha asumido gastos adicionales a base de un presupuesto que cada año se ha reducido, toda vez que la situación económica del País ha afectado la venta y transacciones de propiedad inmueble que requieren la cancelación de sellos a su favor. Es de notar que los fondos que recibe la Sociedad por concepto de la Ley Núm. 244,

supra, se ha reducido en un 22% entre los años fiscales 2007-2008 y el 2008-2009. De igual manera, los fondos que se reciben por concepto de la Ley Núm. 47, supra, reflejan una reducción de un 3% para el mismo período. La situación económica que enfrenta la Sociedad, sumada al aumento en el costo de los servicios que ofrece, han obstaculizado que su crecimiento vaya a tono con la cantidad de casos que atiende y las demás labores que ejerce.

Mediante esta Resolución Conjunta, esta Asamblea Legislativa reasigna a la Sociedad para Asistencia Legal, la cantidad de dos millones de dólares (\$2,000,000.00) provenientes del Fondo Especial de Compensaciones a Víctimas de Delito, para que dicha Institución atienda las necesidades operacionales de la agencia durante el presente año fiscal. Se entiende que esta reasignación no afectará los servicios que ofrece la Oficina, ya que el Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito recibe ingresos provenientes de otras fuentes, tales como multas, intereses y reembolsos federales. Además, la Sociedad para Asistencia Legal, presentará un informe detallado no más tarde de seis (6) meses, a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta a la Asamblea Legislativa, sobre el uso de los recursos asignados. En vista de ello, el balance del Fondo Especial quedaría en aproximadamente en ocho millones (\$8,000,000.00) de dólares, lo que representa una cantidad considerable para que la Oficina cumpla con los compromisos dispuestos por la Ley Núm. 183, según enmendada, ya que el gasto anual promedio con cargo al Fondo durante los últimos tres (3) años es de ochocientos mil dólares (\$800,000.00) por año.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.-Se reasigna a la Sociedad para Asistencia Legal la cantidad de dos
2 millones de dólares (\$2,000,000.00), provenientes del Fondo Especial de
3 Compensación a Víctimas de Delito. Disponiéndose que estos fondos serán
4 utilizados con el fin exclusivo de cubrir los gastos operacionales y los mismos no

1 serán objeto de inversión, transferencia, negocio o especulación financiera por parte
2 de la Sociedad para Asistencia Legal.

3 Sección 2.-La Sociedad para Asistencia Legal rendirá un informe detallado
4 sobre el uso de los recursos asignados mediante esta Resolución Conjunta, el cual
5 deberá ser presentado en las Secretarías de Ambos Cuerpos Legislativos, no más
6 tarde de seis (6) meses, a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.

7 Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente
8 después de su aprobación.